

ECONOMÍA / POLÍTICA

Bruselas acelerará la producción de chips en Europa con ayudas públicas

FORO DE DAVOS/ Ursula von der Leyen anuncia que a principios de febrero presentará su propuesta de ley europea de chips para reducir la dependencia de Europa de los semiconductores de Asia y EEUU.

J. Díaz, Madrid

Fábricas de coches a medio gas por la falta de semiconductores y circuitos integrados; miles de sus empleados inmersos en ERTE intermitentes y listas de espera de meses para adquirir un vehículo. Son algunas de las consecuencias de la crisis de los chips, que aunque está golpeando con especial dureza al sector del automóvil extiende sus tentáculos sobre otras industrias, impactando sobre la fabricación de dispositivos que el mundo usa a diario como móviles, *tablets*, ordenadores o impresoras, pero también lavadoras o frigoríficos. Aunque es un problema global, la crisis se ha cebado con Europa por su enorme dependencia de los chips procedentes de Asia (sobre todo de Taiwán, además de Corea del Sur y China) y de EEUU. Todo ello en un contexto de desacople entre la oferta y una fuerte demanda digital que ya surgió con la pandemia y ha seguido creciendo después. Bruselas quiere reducir a marchas forzadas esta dependencia y, por ello, acelerará sus planes para crear un ecosistema de chips europeo de última generación, nutrido a golpe de talonario público si es necesario. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció ayer durante su intervención virtual en el Foro de Davos que a principios de febrero presentará su propuesta de ley europea de chips, cuya piedra angular será permitir, por primera vez, ayudas públicas para financiar la instalación de centros de producción de microchips en los países de la UE y acelerar así su desarrollo.

Es una novedad de calado en una Europa que hasta la irrupción de la pandemia había sido alérgica a cualquier tipo de auxilio estatal y que ha permitido la recapitalización de empresas en apuros con fondos públicos solo como medida excepcional por el Covid. Por eso, Von der Leyen quiso dejar claro ayer que la adaptación de las normas para permitir ayudas estatales a los futuros fabricantes de chips europeos se realizará “bajo un conjunto de condiciones estrictas”.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ayer durante su participación virtual en el Foro de Davos.

La crisis de los semiconductores, ¿hasta 2023?

Aunque los principales organismos internacionales confían en que los problemas de suministro se vayan diluyendo de forma gradual, sobre todo a partir de la segunda mitad de este año, la crisis de los chips podría ir para más largo. Así lo advirtió el BCE en su último boletín económico, en el que alertó de que, respecto al atasco provocado por la falta de semiconductores, “no cabe esperar mejoras considerables hasta más avanzado el año 2022 o en 2023”. ¿La

causa? El Banco Central Europeo recordó que para incrementar la producción de chips, y por tanto la oferta, es preciso un elevado nivel de inversión que aumente la capacidad productiva, lo que requiere tiempo. De hecho, se estima entre dos y cuatro años para montar una fábrica plenamente productiva. Para el sector europeo del automóvil, que absorbe alrededor del 37% de la demanda europea de chips, es una pésima noticia, que, pese a todo, parece tener

en gran medida asumida. De hecho, el CEO de Renault, Luca de Meo, admitió la semana pasada que los problemas de aprovisionamiento de chips continuarán durante todo este año, aunque se mostró confiado en que las perturbaciones serán menores en la segunda mitad del año. La onda expansiva ha golpeado con especial fuerza a España, que es el segundo mayor fabricante de coches de Europa y que solo en noviembre pasado vio caer en un 28% la producción de vehículos.

Para la jefa del Ejecutivo comunitario es urgente acelerar al máximo el proceso. “No tenemos tiempo que perder”, señaló Von der Leyen, cuyo ambicioso objetivo es duplicar la producción europea de semiconductores en solo una década, pasando del 10% que representa actualmente a escala mundial al 20% en 2030. Para la Unión Europea, reducir la dependencia tecnológica de China y EEUU es crucial, máxime cuando los dos grandes pilares de su transformación económica pos-Covid son la transición digital y la climática. El problema es que Europa sale desde muy atrás

en la *pole position* de la carrera tecnológica, de la que se quedó descolgada hace años. Además del elevado coste de producción de los chips, es indispensable tecnología punta que la UE no tiene en estos momentos. De ahí que Von der Leyen situara la primera piedra de su iniciativa en fortalecer “nuestra capacidad de investigación e innovación de clase mundial en Europa”, antes de concentrar sus esfuerzos en “asegurar el liderazgo europeo en diseño y fabricación”.

La iniciativa llega tarde para esquivar los efectos de la actual crisis de abastecimiento,

que según el BCE se prolongará todo 2022 e incluso podría adentrarse en 2023 (ver información adjunta), pero busca prevenir que se repitan episodios tan agudos en el futuro. De hecho, la presidenta de la Comisión prometió ayer mejorar “nuestras herramientas para anticiparnos y responder a situaciones de escasez y de crisis en este sector” y reforzar así “nuestra seguridad de suministro”.

Aunque la futura ley europea de chips se encuentra aún en fase embrionaria, ya ha suscitado recelos. La directora general de la OMC, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, ad-

virtió ayer, también desde el Foro de Davos virtual, del riesgo de que la actual crisis de semiconductores derive en un nuevo “tecnonacionalismo”. “Entiendo el intento de garantizar las cadenas de suministro y diversificar riesgos, pero habría que ser cautelosos e intentar no ir demasiado lejos a la hora de controlar las industrias”, señaló. Antes, Von der Leyen, quizá previendo las críticas, había asegurado que “Europa trabajará para mantener los mercados abiertos y conectados” impulsando la diversificación entre socios.

Cs ayuda al Gobierno al apoyar la reforma laboral

M.V. Madrid

Ciudadanos anunció ayer que apoyará el pacto sobre la reforma laboral, cerrado entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, “si no se toca una coma del mismo”. Es decir, en los mismos términos que defienden los firmantes del acuerdo.

Con ello, en este momento, la convalidación del real decreto ley, en el Congreso de los Diputados suma ya 164 escaños: 155, entre la coalición de Gobierno, más los nueve diputados de Ciudadanos. El apoyo de los liberales a la reforma puede hacer que al Ejecutivo no le hagan falta los votos de ERC. Siempre que consiga el respaldo del PNV y de algunos partidos minoritarios, como los nacionalistas canarios, Foro Asturias y otras formaciones a la izquierda del hemiciclo. Podría conseguir la mayoría absoluta de 176 escaños, porque el PP y Vox van a votar en contra de la reforma laboral.

“Si no se toca una coma [del real decreto ley], votaremos que sí”, dijo ayer Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Incluso, aunque el Gobierno no llame a esta formación para negociar. Con su postura, Ciudadanos quiere evitar la presión que están haciendo ERC y PNV para acometer cambios muy importantes en el acuerdo. Por ejemplo, la primacía del convenio autonómico sobre el de ámbito nacional. Una propuesta que afectaría muchísimo a la competitividad de las empresas.

Problemas

El respaldo de Ciudadanos crea problemas en la coalición de Gobierno, porque es un partido liberal, de la derecha, que amenaza con romper la mayoría de la investidura. El portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, dijo que “el bloque de investidura [que apoyó a Sánchez] es un patrimonio político muy valioso que hay que conservar, y jugar a la geometría variable con una cuestión tan fundamental como el mercado laboral es un error; las intenciones de Ciudadanos no son honestas”. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, confió en obtener al final el respaldo del PNV al acuerdo.